

Aviso Legal

Capítulo de libro

Título de la obra: Los pueblos, barrios y comunidades en defensa de la Madre Tierra y el territorio

Autor: Pineda Ramírez, César Enrique

Forma sugerida de citar: Pineda, C. E. (2021). Los pueblos, barrios y comunidades en defensa de la Madre Tierra y el territorio. En G. Makaran y P. C. Flores (Eds.), *Más allá del Estado: comunidad, autonomía y resistencia indígena en México y América Latina*. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.

Publicado en el libro:

Más allá del Estado : comunidad, autonomía y resistencia indígena en México y América Latina

Cuidado de la edición: Leticia Juárez Lorencilla

Preparación digital del original: Beatriz Méndez Carniado e Irma Martínez Hidalgo

Diseño de la cubierta: Marie-Nicole Brutus Higuita

Edición ePub: Irma Martínez Hidalgo

ISBN: 978-607-30-2202-6

Los derechos patrimoniales del capítulo pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México. Excepto donde se indique lo contrario, este capítulo en su versión digital está bajo una licencia Creative Commons Atribución-No comercial-Sin derivados 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0 Internacional). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>



D.R. © 2021 Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C. P. 04510, México, Ciudad de México.

Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe Piso 8 Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Ciudad de México. <https://cialc.unam.mx/>
Correo electrónico: betan@unam.mx

Con la licencia:



Usted es libre de:

- ✓ Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

Bajo los siguientes términos:

- ✓ **Atribución:** usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
- ✓ **No comercial:** usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
- ✓ **Sin derivados:** si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal de la licencia completa disponible en:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>

En los casos que sea usada la presente obra, deben respetarse los términos especificados en esta licencia.

Los pueblos, barrios y comunidades en defensa de la Madre Tierra y el territorio

César Enrique Pineda^[1]
Moderador

CÉSAR ENRIQUE PINEDA: Existen numerosos actores sociales, movimientos y sujetos colectivos en México que están luchando, construyendo autonomías y proyectos o defendiendo los bienes comunes naturales. El modelo de desarrollo económico que nos rige está basado en la explotación intensiva de los recursos y los territorios. Los proyectos de infraestructura se han vuelto la modalidad más importante de inversiones en toda América Latina: desde el Plan de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), un proyecto carretero que conecta toda América Latina, o el hoy muerto Plan Puebla-Panamá (símbolo de

^[1] César Enrique Pineda es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y profesor en la misma Casa de estudios. Su investigación se centra en la contradicción del capital frente a la naturaleza, así como en movimientos sociales en América Latina. Participa activamente en procesos de educación popular con comunidades indígenas, campesinas y movimientos populares.

las venas que atraviesan la región), en toda América se dan proyectos de inversión en infraestructura, muchos de los cuales pertenecen a grandes corporaciones.

Era muy importante contar en este espacio con un tipo de expresión de lucha urbana pues solemos pensar que todo el despojo del territorio es esencialmente rural o indígena, pero hay otra dinámica de desposesión llamada hiperurbanización (muy distinta a la urbanización popular) que responde a la utilización de la tierra y del suelo y que está ligada a la acumulación del sector inmobiliario.

Las corporaciones están usando el territorio en todo el continente para ejecutar megaproyectos de infraestructura que prácticamente lo han invadido y han provocado una oleada de resistencia, y es que desde los grandes proyectos de inversión petrolífera y minera, de las hidroeléctricas, de la soya transgénica o los proyectos de megacultivos de pinos y eucaliptos en el territorio mapuche en Chile, estas grandes inversiones avanzan y utilizan los bienes comunes naturales: el agua, los bosques y la tierra para su desarrollo. El problema es que no son simplemente ecosistemas, sino esencialmente pueblos, culturas, barrios, historias y memorias los que están en riesgo.

Por eso nos acompañan hoy los compañeros de tres movimientos vigentes y en lucha que actúan de forma barrial y comunitaria; se agradece que entre tantas cosas que hacen, llevan a cabo la defensa por la vía legal y la movilización, además de la organización comunitaria, también se dan tiempo para compartir sus experiencias. Los tres movimientos que van a presentar a continuación sus testimonios de lucha forman parte de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, una iniciativa que intenta difundir y visibilizar este tipo de movimientos que no son sólo contra el despojo, sino en defensa de la naturaleza, la cultura y otras formas de organización gubernativa:

- La Asamblea de Pueblos, Colonias, Barrios y Pedregales de Coyoacán que se enfrenta a la Inmobiliaria y la admi-

nistración local y su idea de urbanización en la Ciudad de México, delegación Coyoacán.

- La Comunidad de San Francisco Xochicuautla del Frente Indígena en Defensa de la Madre Tierra y sus autoridades comunitarias en defensa del bosque y sus tierras comunales afectadas por el proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan.
- El Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua: Puebla, Morelos, Tlaxcala de la comunidad de Amilcingo, Morelos que se organiza en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM), un proyecto de infraestructuras que incluye la construcción de centrales termoeléctricas y un gasoducto, promoviendo las inversiones privado-estatales para la producción energética y que ha implicado una oleada de desposesión a los pueblos de la zona.

ASAMBLEA DE PUEBLOS, COLONIAS, BARRIOS Y PEDREGALES DE COYOACÁN: Les traigo aquí la piedra del volcán Xitle que ha dado cobijo a los pueblos, las colonias, los barrios y los pedregales de Coyoacán, y las flores que representan sus bosques. Hay que saber de dónde venimos, qué nos da la vida.

La resistencia camina por el pueblo, en una lucha por transformar el mundo. Las injusticias que se están cometiendo y la respuesta del gobierno preocupan pues es una forma de injusticia legalizada. El gobierno demuestra su carácter criminal, declara una guerra contra los pueblos y sus culturas. Los proyectos criminales declaran la guerra contra el agua, la tierra, los manantiales, contra los cerros, los volcanes, contra todo lo vivo.

La represión se hace presente ante la defensa y el legítimo derecho de defender la vida. Ante acciones como el ecocidio, el gobierno responde reprimiendo. Por ello, hay que hacer un llamado a las organizaciones, hay que lanzar una alerta nacional e internacional, para actuar en favor de la vida, para seguir cosechando triunfos,

seguir liberando lugares, liberando espacios de los megaproyectos de muerte, donde los grandes poderíos económicos internacionales manifiestan un total desprecio por la vida.

En Pedregales se hace la defensa de la vivienda pues han llegado las grandes inmobiliarias a despojar. La Asamblea de Pueblos, Colonias, Barrios y Pedregales de Coyoacán comienza la lucha del predio de Avenida Aztecas 215, debido a una serie de acciones ilegales que permiten la construcción de un edificio de departamentos, lo que necesitó la autorización del cambio de uso de suelo pues la Compañía Inmobiliaria Quiero Casa pretende construir unos 370 departamentos y 683 cajones de estacionamiento sobre la superficie de un manantial. Esta lucha se inició el día 25 de febrero de 2016, después de haberse realizado unas ocho asambleas vecinales se decidió formar la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, el 29 de abril de 2016, así se estableció el plantón con el objeto de lograr la cancelación definitiva y la expropiación del terreno por causas de utilidad pública.

Se organizó una asamblea general integrada por los vecinos de los pueblos y colonias de los Reyes, la Candelaria, el Pedregal de Santo Domingo, Santa Úrsula, Ajusco, Ruiz Cortines, Díaz Ordaz, así se acordó instalar un plantón el día 29 de abril de 2016, que se ubica en el predio de la construcción.^[2]

Unidos bajo un mismo ideal, los vecinos persiguen un objetivo común: luchar contra la inmobiliaria. Por ello se pidió el apoyo de todos los vecinos con víveres, lonas, carpas, así como acciones de brigadeo para la concientización del problema. A cinco meses de iniciado el plantón se logró la suspensión de la obra, pero no su cancelación. El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) colocó el día 18 de abril de 2016 los sellos correspondientes a la cancelación por medidas de seguridad. Así ha continuado la movilización vecinal, constituyendo las comisiones de

^[2] El plantón fue desmantelado por la policía en la madrugada del 5 de diciembre de 2016, apenas dos meses después de este testimonio. Desde aquel entonces la inmobiliaria Quiero Casa ha proseguido con la construcción, protegida por las fuerzas del orden ubicadas en cercanía del predio. Sin embargo, la lucha de los Pedregales continua.

acopio, cocina, finanzas, prensa, todo de una manera organizada. Y es que sólo a través de la organización se han mantenido en pie las demandas.

La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) solicitó a un investigador del Instituto de Geología de la UNAM una opinión técnica sobre el origen y flujo del agua del predio de Av. Aztecas 215, se dictaminó que el agua proviene de un acuífero somero que los vecinos han aprovechado por muchos años y que ha llevado agua a los parques ecológicos de Xotepingo, Loreto y Peña Pobre, además dicha agua después de un tratamiento sencillo puede incorporarse a la red de agua potable.

La opinión técnica elaborada por un experto del Instituto de Geología de la UNAM, resolvió que no es aceptable que se tiren esos volúmenes de agua al drenaje, y que la perforación del manto acuífero lo condena a su extinción, y es que en la zona la empresa instaló mangueras para drenar el agua que la conducían directamente a la cañería, además de pipas que se llevaban agua para desecar el terreno.

Se ha organizado la defensa del manantial y en favor de la expropiación del predio para uso comunitario, ya que se tiene la conciencia de que los megaproyectos destruyen los recursos naturales. A la empresa inmobiliaria no le importa si destruye el manto acuífero. El 18 y 19 de septiembre de 2016 un equipo de ingenieros de la inmobiliaria implementó la construcción de un cinturón alrededor de la obra para concentrar el agua derramada e impedir que ésta se filtrara de manera natural, remedio que se propuso con la intención de seguir con la construcción.

Pocos días antes, el 14 de septiembre se decidió en la asamblea hacer una manifestación donde los vecinos participaron y se logró que Pedro Bello, director de Gestión Social de la Ciudad de México, montara una mesa de trabajo. Los ingenieros de la empresa manifestaron que el agua que brota del predio de Av. Aztecas 215 era cancerígena, que es un escurrimiento y que mediante pruebas hidrogeoquímicas del agua se determinó que está contaminada y que causa cáncer; y como medida para remediar la situación se

construyó el cinturón que no es más que una presa, para que el agua acumulada más tarde beneficie a los compradores de los inmuebles. Por supuesto todo lo dicho por la empresa es falso y ante ello no queda más que la organización vecinal.

CÉSAR ENRIQUE PINEDA: Hay una dinámica que se ha venido acelerando en la Ciudad de México y en su zona conurbada. El día de hoy (5 de octubre de 2016) se inaugura el teleférico en el municipio de Ecatepec, Estado de México, proyecto que ha tenido una gran oposición y se considera contradictorio si se estima la pobreza actual en Ecatepec.

Proyectos como éste, los hay en toda la ciudad, está, por ejemplo, el del Tren Interurbano que se espera construir en la zona poniente para que sea una vía de comunicación hacia Toluca, o bien la oposición que hubo alrededor de la construcción del paradero de Chapultepec, o la protesta en torno a las aperturas de la cadena comercial Walmart, donde el Frente Autónomo Xochimilco ha detenido la construcción del nuevo supermercado, o la férrea oposición, aunque más tarde derrotada, de los ejidatarios de Tláhuac en el caso de la construcción de la línea 12 del Metro, la misma que terminó en un fraude y tuvo que clausurarse por pésimos materiales usados en su construcción. Así también, tenemos la experiencia del despojo y la expulsión de cientos de familias en la delegación Magdalena Contreras para la construcción de la Supervía Poniente. Esta dinámica se encuentra dentro de tres lógicas: la de especulación del suelo; la urbanización de mercado, es decir, las corporaciones que siguen construyendo casas para obtener ganancias, cuando en todo el país existen cinco millones de estas viviendas vacías, abandonadas a causa de su mala calidad de construcción; y la gentrificación, que es la expulsión de los pobres de las zonas céntricas de la ciudad, potencialmente rentables.

Estos procesos se insertan en una dinámica de exclusión ¿Quién decide sobre la ciudad? ¿Quién decide sobre los bienes comunes na-

turales? ¿Cómo se decide y hacia dónde? Estamos prácticamente apresados por la lógica de urbanización de mercado que utiliza el suelo como mercancía. Siempre es complicado dar la discusión en torno al proyecto de infraestructura urbana y sobre proyectos que buscan la generación de energía, ya que se plantean como proyectos de beneficio común, es el caso, por ejemplo, del PIM. Los compañeros del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua: Puebla, Morelos, Tlaxcala nos van a explicar su historia de varios años de resistencia comunitaria. ¿Qué hacer frente a estos proyectos de infraestructura faraónicos que se desarrollan en el país?

FRENTE DE LOS PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA: PUEBLA, MORELOS, TLAXCALA: El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua: Puebla, Morelos, Tlaxcala es un puente que se conformó hace cinco años ante la amenaza del PIM, este es un proyecto energético impulsado por la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), por el Gobierno federal y por tres empresas españolas que son las principales accionarias en el proyecto. El PIM se compone de un gasoducto de 160 km que atraviesa las faldas del volcán Popocatepetl, uno de los más activos del mundo, también están implicadas dos termoeléctricas y un acueducto en el estado de Morelos. Este proyecto es impulsado por el estado y empresas en el marco de la reforma energética de 2013 y es uno de los principales proyectos de generación de energía termoeléctrica.

En nuestro país se están impulsando alrededor de 70 termoeléctricas, la pregunta es ¿para qué queremos tanta energía, cuando México ya sobreproduce energía? Y es que es común que los países generen energía de reserva, alrededor de 20 % por arriba de lo que necesitan, sin embargo, en México se produce 40 % más. Aun así, se sigue apostando por este tipo de proyectos.

Lo cierto es que se ha estado fomentando un proceso de industrialización y de despojo que se interrelacionan. Hay una profunda transformación de los territorios, impulsada por los grandes

capitales. El PIM que es impulsado a raíz de la reforma energética se enmarca en la noción del interés general (social), eso significa que al beneficiar a toda la sociedad no importan los costes sociales “menores”. Los proyectos se imponen y además se despoja de las tierras a los campesinos.

El PIM afecta a más de 80 pueblos entre los tres estados, todos ellos son pueblos nahuas que viven alrededor del volcán, principalmente en Puebla y en Morelos, donde la mayoría de los campesinos se dedican a la siembra de amaranto, maíz, sorgo y caña, a la recolección de chapulines, y algunos pueblos a la alfarería, sobre todo en Tlaxcala. Este proyecto también supone el despojo del agua porque se utilizan 50 millones de litros de agua por segundo para poder manejar la termoeléctrica; es un despojo de tierras porque la vía de paso se traza sobre los terrenos de agricultura. Se le dice a la gente que le van a rentar sus tierras por 25 años, que van a poder usarlas para sembrar porque el tubo del gasoducto es subterráneo, sin embargo, no les dicen que esas tierras ya no pueden ser usadas para la agricultura y que se emite una serie de gases tóxicos de alta peligrosidad.

El gasoducto que están construyendo tiene una profundidad de 80 a 120 cm; en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se dice que serían dos metros de profundidad, pero como vemos la información está puesta a modo, pues en realidad el diámetro del tubo es de 80 cm. Esto significa un atentado contra la vida porque pone en riesgo a las personas que viven alrededor. En el mapa de riesgo volcánico generado por el Instituto de Geofísica de la UNAM se establece que hay altos niveles de riesgo, puesto que el gasoducto pasa por la zona de influencia sísmica, ante ello la CFE dice que no hay ningún problema porque se trataría de una zona de menor riesgo volcánico.

Sin embargo, por la presencia de lahares (combinación de gases y líquidos provenientes del volcán) que podrían romper el tubo del gasoducto en caso de una contingencia volcánica, sí hay un riesgo muy elevado para las poblaciones vecinas, porque además el tubo cierra el paso a las vías de escape y ante una situación de crisis

las poblaciones quedarían encerradas entre el gasoducto y el volcán. La CFE dice que no hay peligro porque además la última erupción del Popocatepetl fue hace muchos años, esto es desmentido por el propio Instituto de Geofísica, que dijo que la actividad de los lahares es constante, lo que significa que hay un riesgo permanente para la población.

El gasoducto es el inicio de un proyecto más amplio de industrialización no sólo en Morelos, ya que se planea que sea el alimentador de proyectos en los tres estados de la República. La industrialización de Morelos es el corazón del proyecto, porque allí se juntan los tres elementos necesarios. Ésta sería la primera etapa: por lo que se sabe, después de la termoeléctrica vendría la construcción de un parque industrial desde Huesca hacia Cuautla-Ayala, además de seis concesiones mineras y un basurero con una vía del tren para llevar la basura de la Ciudad de México. Este es un proyecto muy grande de industrialización que intenta terminar con la vida campesina de todo el oriente de Morelos detrás del falso discurso de mejorar la calidad de vida, en realidad, lo que hay es un afán por acabar con la vida campesina.

Una de las implicaciones de la termoeléctrica es que desprende ozono que, combinado con los isoprenos de la producción agrícola, genera un empobrecimiento de la tierra. Además, se van a llevar el agua que utiliza la agricultura para incentivar el desarrollo industrial. Como vemos es un paquete de destrucción y de atentados contra la vida.

Hay que decir que nunca hubo información previa en las asambleas, nunca se dijeron cuáles eran las implicaciones del proyecto. Lo que sí es fácil de notar es que existe una metodología del despojo por parte del gobierno y las empresas, y es que se llegó directamente con las personas dueñas de las tierras por donde iba a pasar el gasoducto, se fue directamente con las autoridades ejidales y comunitarias para cooptarlas. Se tiene conocimiento de que hay una oficina en la CFE que se dedica a hacer los mapeos de los actores de la comunidad con el fin de conocer quiénes están a favor y quiénes en contra. Para el gobierno y las empresas es fácil comprar a las

autoridades, es fácil vacunar a la gente a favor del “desarrollo” y sus supuestos beneficios.

En muchos lugares aún no se tenía conocimiento del proyecto y entonces se empezaron a hacer reuniones informativas, se les contaba a los demás pueblos de las implicaciones ambientales y sociales del proyecto, lo que se reconoció es que la gente no tenía conocimiento pleno del proyecto: algunos decían que se trataba de una termoeléctrica, otros, de un gasoducto, otros más de una pista de aterrizaje. La gente empezó a notar que llegaba gente de la CFE a preguntar por los ejidatarios y visitarlos en sus casas. Sin embargo, con las reuniones informativas que se tenían en los pueblos y al tener cada vez más información es donde se dieron cuenta de que se trataba de un monstruoso megaproyecto.

Los tres proyectos que parecen diferentes en realidad son uno mismo, y allí hay otro problema y es que, ante la falta de información, hay algunos pueblos que no hacen suyos todos los problemas, por ejemplo, en Ayala les interesa que no se lleven el agua, pero no les interesa el gasoducto. Ha sido muy difícil que todos entiendan que lo que parecen tres proyectos diferentes son en realidad uno mismo, aunque poco a poco se ha avanzado en esta situación. En Huesca, por ejemplo, se lucha contra todo el proyecto pues se ha logrado hacer visible que esos tres proyectos son en realidad el mismo.

En la búsqueda de información se van reconociendo unos pueblos con otros, para conformarse en un frente y así luchar todos juntos. A la par que se va conformando la organización y se lucha por parar el proyecto, los pueblos trabajan por un cambio al interior y es que muchos jamás habían salido a las calles a una manifestación como en Huesca, otros ya tienen más experiencia como en Amilcingo. Así, la lucha de las poblaciones y los pueblos integra a más de 80 pueblos afectados de los tres estados, esto supone una organización muy complicada, con muchas fracturas, y es muy difícil coordinar la resistencia.

Lo primero que se tuvo que hacer fue informarse y a partir de allí, ir notificando a otros pueblos: se viajaba pueblo por pueblo para informar lo que estaba pasando, así los ejidatarios de Ayala su-

pieron que su agua ya estaba vendida porque el pueblo de Amilcingo fue a informarles, en vista de que las autoridades callaban toda esa información. Por ello es muy importante apropiarse de la información, que la misma gente hable de ella, de las manifestaciones de impacto ambiental, del riesgo volcánico, de los gases. Todo esto significa aprender a utilizar el lenguaje técnico que las empresas y el Estado utilizan, significa apropiarse y empaparse de la información, ésta es un elemento muy importante para la organización y la toma de decisiones, por lo que se han generado marchas, caravanas, campañas informativas y pinta de bardas en todos los pueblos.

Otro elemento muy importante en la lucha de los pueblos son las asambleas, en principio cada que se podía, se convocaba a una asamblea comunitaria para generar organización. En la asamblea se comenzaron a generar los diferentes comités de resistencia, porque lo cierto es que no todos los pueblos entraron a la resistencia, se trata de un poco menos de la mitad de los pueblos afectados los que entrar a luchar porque, como se dijo, ya hay una estrategia y una metodología del despojo para apaciguar a la organización.

Las mujeres de Huesca han hecho un campamento en la termoeléctrica para impedir el avance de las obras, han encabezado el cierre de presidencias municipales y han cerrado el paso a las máquinas. Todas estas acciones con el fin de parar el proyecto, toda la movilización y la organización del pueblo ha retrasado algunos años su operación planeada originalmente para 2013.

También en Ayala los ejidatarios luchan contra el acueducto y hay muchas amenazas de represión; la mitad de los pueblos que entraron a la lucha han sido intervenidos por el ejército y la policía para intimidar, ha habido detenciones, presos políticos, casos de tortura, hostigamiento y acoso.

En 2014 entró el ejército custodiando los tubos del gasoducto porque esta fue la única forma en que se pudo construir. La gente se pregunta para qué está hecha la seguridad y el ejército ¿No se trata de cuidar a la ciudadanía y no a las empresas? Se detuvieron a algunos compañeros organizados. En muchos lugares cuando empieza la represión los pueblos deciden ya no organizarse; en otros

lugares aun cuando ha pasado el gasoducto la lucha sigue y la gente continúa organizándose.

La lucha legal es también muy importante, así que ha habido muchas acciones legales de defensa, sin embargo, como los proyectos energéticos traen un supuesto beneficio general para todos los mexicanos, lo demás serían sólo daños colaterales. Los únicos que estaban logrando detener el megaproyecto eran los amparos agrarios porque la figura del ejido responde también al interés social.

Sin embargo, también se ha criminalizado a los ejidarios que luchan por sus tierras; una de las compañeras que está presa es una comisariada ejidal quien, siguiendo los acuerdos de su asamblea, no permitió el paso del gasoducto por las tierras del ejido. Muy pocas autoridades ejidales han tomado en sus manos la defensa de sus pueblos, la mayoría ha cedido frente al miedo a la represión y la compra de voluntades. Por ello, ha sido muy difícil llevar a cabo una estrategia legal, pues además, aunque el poder judicial otorgue la suspensión, la empresa no la respeta. Y definitivamente la empresa avanza con la complicidad del Estado.

La historia de la lucha de los pueblos de Morelos es larga: algunos pueblos organizados se reúnen todos los días en un proceso de trabajo que apuesta por la autonomía. Ésta es una lucha por la creación de la autonomía, se ha trabajado en una radio comunitaria que no tiene el permiso del Estado, pero que cuenta con toda la legitimidad de los pueblos de la zona oriente de Morelos y de la zona poniente de Puebla. Hace poco el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) intentó despojar a la radio de su transmisor, pero no pudieron porque en menos de cinco minutos, cuando se replicó la campana de la iglesia, el pueblo salió a defender su radio, un espacio muy importante de comunicación comunitaria.

Además de la radio se ha incentivado la creación de un proyecto de educación autónoma con la Escuelita Sabatina Popular, para formar niños felices, alegres y críticos, que pregunten e investiguen. Otro proyecto es la brigada de salud Vihn Flores Laureano, donde promotoras de salud de la comunidad dan terapia a las compañeras y compañeros de los pueblos, pues la salud juega un papel muy im-

portante en la lucha cotidiana y es que el Estado intenta desgastar la salud de la gente, por lo que hay que seguir con el cuidado de ésta y de la autonomía.

Así como con el cuidado y el respeto a las autoridades, en febrero de 2016 en Amilcingo se eligieron nuevamente a las ayudantes municipales a la manera tradicional, aun cuando esto ya se había perdido y después de una serie de amparos ante el Tribunal Electoral para que éste les reconociera el derecho de elección por costumbres. Así se retomó la ronda comunitaria y las funciones de seguridad en manos de la gente de la propia comunidad.

La lucha no sólo es contra los proyectos, es una lucha por la vida, no es sólo resistir, sino también es sembrar, en una lucha por la autonomía.

CÉSAR ENRIQUE PINEDA: En todo el país hay procesos de reconstitución comunitaria, lo que demuestra que muchas de las habilidades de las comunidades no sólo resurgen, sino que se actualizan, se rediseñan y son repensadas, incluso superan viejas contradicciones, aunque generan nuevas. Los procesos de indígenas y campesinos que se reorganizan en torno a la defensa del territorio y que aspiran a la autonomía como horizonte van tratando de dejar algunas trabas del pasado y recuperar lo que les es útil para su propio proceso de vida; resurge el proceso identitario y la identidad colectiva, la forma de organización autogubernativa y la cosmovisión de los pueblos.

Sin embargo, también vemos la cara oscura: en la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra se tienen registrados al menos 95 procesos en lucha en México, pero esas cifras cambian de acuerdo con las fuentes, por ejemplo, en otro proyecto de investigación se encontraron alrededor de 105 luchas contra megaproyectos en el periodo 2014-2015. El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, ubicado en Cuernavaca, Morelos, nos habla de un aproximado de 130 movimientos en todo el

país entre 2009 y 2010, y la investigación de Víctor Toledo^[3] arroja un número cercano a los 300.

En la región latinoamericana podemos hablar de cerca de 1000 a 1200 movimientos en defensa de la tierra y el territorio, se habla de un enorme movimiento continental, y es que por ser los más pobres quienes están en las periferias, aquellos que no tienen recursos monetarios, ni son famosos, ni tienen acceso a los medios, parecieran invisibles. Sin embargo, hay un enorme movimiento que reivindica la tierra, el territorio de las comunidades y la comunidad como forma de vida.

Lo que se ha encontrado es que hay un patrón para imponer los proyectos de “desarrollo”, los pueblos se obligan a entrar en el debate técnico, se vuelven expertos en los asuntos que les atañen. Para construir un frente común hay que entablar relaciones con académicos, con técnicos, con la gente que los apoya, igual ellos mismos se van volviendo expertos.

Estos proyectos de desarrollo en clave capitalista violan los derechos de consulta, casi todas las luchas ganaron suspensiones por la vía jurisdiccional, pero por supuesto los gobiernos y las empresas se pasan por alto al poder judicial. Y es que a pesar de que las comunidades tienen elementos legales para detener las construcciones, éstas continúan sin permiso y en varios casos sin la debida manifestación de impacto ambiental, operan a través de asambleas amañadas o ficticias, asambleas de acarreados de otras comunidades, también con acuerdos en los que hasta los muertos prestan su firma.

Así, los megaproyectos avanzan por la presión, las amenazas o bien la compra y distribución de materiales de apoyo para la comunidad. Se ha documentado que en al menos 65 % de las resistencias contra megaproyectos se ha optado por la violencia y la represión como una vía para restaurar la “paz”, y así la brutalidad policiaca, la violencia criminal de los paramilitares y del narcotráfico se hace presente. Se abre el camino de la violencia para imponer estos

^[3] Víctor Manuel Toledo, *Ecocidio en México. La batalla final es por la vida*, México, Grijalbo, 2015.

proyectos, asesinando, desapareciendo, torturando a los pueblos a través de sujetos “no identificados”, pero que están identificados plenamente con las empresas, con el narcotráfico o con el propio Estado, como es el caso de los grupos paramilitares.

Todos los proyectos de desarrollo son polémicos porque parece que hablar del desarrollo es hablar del beneficio público. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene el estudio y la evolución correcta? ¿Quién decide sobre el espacio público y los bienes comunes? Esto abre discusiones muy importantes sobre la manera en la que se decide, quién decide y hacia dónde van encaminados estos proyectos, sobre cuál es su verdadero objetivo y si se trata de alcanzar el beneficio común o es el beneficio de la máxima ganancia. Y es que detrás del discurso desarrollista del interés y el beneficio común lo que hay es un beneficio privado disfrazado de beneficio nacional, de beneficio colectivo.

Una de las luchas más emblemáticas de la última década es la resistencia de la comunidad de San Francisco Xochicuaautla, que junto con Huitzilapan se ha opuesto en la región otomí del estado de México al proyecto de la autopista Toluca-Naucaupan.

COMUNIDAD SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA: Xochicuaautla era una comunidad feliz, tranquila y pacífica hasta que llegó la represión. En 2007 comenzó la imposición del proyecto de la carretera Toluca-Naucaupan que rompió la armonía y la paz reinante.

San Francisco es una comunidad que se rige por usos, costumbres y tradiciones como la mayordomía y los delegados que son elegidos de manera democrática por voto directo, y es que en junta se coloca un pizarrón y toda la comunidad interesada vota para elegir a los tres delegados y al Consejo de Participación Ciudadana. Para las votaciones la comunidad se divide en cuatro secciones y éstas a su vez se componen por fracciones, por ejemplo, en la comunidad la cuarta sección tiene cinco fracciones, una de ellas es la fracción “Los Pinos”, es así como además se elige a un jefe de sección y aparte a

los comandantes que son cinco o seis jóvenes que reportan cualquier asunto a la delegación. Cuando a los jóvenes comandantes les toca el encargo se ponen a disposición de la delegación para hacer actividades dentro de la comunidad.

Otra de las costumbres de San Francisco es la mayordomía, este encargo se da a tres matrimonios, que son citados en la delegación para aceptarlo, y que consiste en un periodo de trabajo para la iglesia; si el matrimonio acepta el cargo de la mayordomía el pueblo lo anuncia con un cohete festivo y el matrimonio recibe el día 3 de mayo el cargo de mayordomos, que tiene una duración de dos años. Ésta es, como muchas otras, una tradición que perdura en el pueblo, esta forma de hacer comunidad está en peligro por la construcción de la carretera y es que se quiere despojar de la convivencia a la comunidad, de las comidas comunitarias, de las tradiciones que definen a la comunidad de Xochicautla.

El gobierno ha querido dividir la organización comunitaria: lo que está sucediendo ahora es que, si un delegado está a favor del proyecto, la comunidad decide que él ya no va a participar de las costumbres comunitarias. El gobierno también busca dividir a la comunidad, por lo que afecta las costumbres y trata de imponer por medio de recursos económicos el proyecto.

Xochicautla de ser un pueblo pacífico pasó a ser un pueblo que lucha, y es que en 2007 llegó el Estado para imponer la autopista. Al principio la gente no lo creía, no imaginaba que al propio gobierno no le interesara el bosque. Así se dio a conocer poco a poco el proyecto a toda la comunidad, pese a que las autoridades en ese entonces en el cargo no daban información; ellos también fueron cómplices del gobierno porque permitieron que su gente ingresara y marcara con estacas el bosque, permitieron que se trazaran e hicieran las mediciones para el proyecto de la autopista.

Fue hasta el 25 de febrero de 2007 cuando se hizo una asamblea y se convocó a toda la comunidad, cerrando la carretera para que no saliera la gente del pueblo a sus trabajos y se quedara allí en la asamblea. Acudieron unas 1200 personas y así se decidió que no se quería la carretera. Claro que hubo gente que intentó decir

que sería bueno hacer una negociación, pero muchos se negaron, porque la carretera no les interesaba. En las tres o cuatro asambleas que siguieron todos se negaron al proyecto.

Cuando el gobierno se da cuenta de que la comunidad no quería el proyecto, entonces organizó un padrón de comuneros que tomaba en cuenta sólo a algunos: 342 de la Concepción y unos 300 de Xochicuautla. Así se fueron haciendo las asambleas sólo con los comuneros que registró la autoridad y algunos de los afectados por el proyecto que tenían una carta poder, sin embargo, con el tiempo se les fue negando la entrada. Los comuneros que pueden entrar a las asambleas son muchas veces gente que no vive allí, algunos viven en la Ciudad de México y sólo tienen tierras en el estado de México. Esto claramente es una trampa del gobierno para registrar gente a su conveniencia.

Hay un fuerte debate sobre la participación de algunas personas y es que el Estado sólo dialoga con los comuneros que registró, además cuando se realizan las reuniones hay una fuerte presencia del aparato policial, llegan los granaderos desde las tres de la mañana para custodiar y tener el control. En las asambleas no sólo hay gente del gobierno, sino también del Grupo Higa.^[4] Esas no son asambleas de comuneros, ¡son asambleas de granaderos!

El Estado ha ido identificando a las personas que no están de acuerdo y las vigila, las acosa. Cuando hay asamblea, los opositores son vigilados en sus casas, son los propios vecinos los que se dan cuenta de la presencia de coches sin placas estacionados en las calles donde viven los compañeros que más se oponen al proyecto. Por ello se han tomado medidas de seguridad para las personas que están siendo vigiladas. Hay amenazas constantes y hostigamientos por parte del gobierno, pero en Xochicuautla se ha tenido el cuidado de no caer en esas provocaciones. La gente está muy consciente

^[4] Grupo Higa, la compañía con sede en Toluca, estado de México, presidida por Juan Armando Hinojosa, es una empresa que ha ganado diversas licitaciones y adjudicaciones de obras públicas con serias sospechas de irregularidades.

de que se tiene que cuidar. Ha habido golpes a la gente mayor, a jóvenes y a mujeres que se han resistido y se han opuesto al proyecto.

Otra estrategia del gobierno es la de llamar a subastar las tierras: se les pusieron tres diferentes precios, mismos que fueron votados por 109 de más de 450 comuneros, a 240 de ellos les iban a pagar 20 000 pesos por sus tierras, a 180 les iban a dar 30 000 pesos y a 160 comunes les iban a dar 40 000 pesos. Algunos sí decidieron tomar la oferta y vender sus tierras. Pero los que se mantuvieron en el “no”, se conformaron en un frente junto con otros ocho pueblos cercanos como Huitzilapan y Santa Cruz Ayotuxco. Entonces se empezó a formar el frente y se empezó a organizar a partir de una serie de encuentros entre pueblos, donde se han conocido más personas que divulgan su lucha en distintos espacios como en las universidades.

Ha habido varios detenidos en dos ocasiones, en la primera fue cuando el maíz estaba creciendo, se llevaron a la compañera Basilia junto con otros 14 compañeros (ella vive del maíz, se mantiene de la venta de tortillas). Detuvieron a Basilia y a los compañeros y no los dejaron salir hasta pasadas 72 horas. La otra detención sucedió cuando se llevaron incluso a personas de la tercera edad, al delegado Armando García, a un abogado y a algunos jóvenes, aunque se logró sacar a las personas de la cárcel gracias al apoyo social y a las redes que se han construido. El 11 de abril de 2016 llegaron las máquinas a derribar la casa de Armando García, destrozando todo, hasta sus papeles importantes. En la casa había gente, pero nada les importó, apenas lograron salir Armando y los demás.

En los amparos son muy importantes las pruebas y han servido mucho para los procesos judiciales, pero éstos tampoco sirven de mucho. Por ahora se llevan cuatro amparos, y el gobernador del estado de México ha declarado que espera que los jueces fallen a favor del proyecto para darle inicio. Otra situación que no se debe olvidar es que hace poco tiempo, un grupo de arqueólogos encontró vestigios, lo que podría ser útil para frenar la depredación si se comprueba la presencia de más rastros de alguna cultura prehispánica.

En Xochicauautla se han realizado eventos junto con otras organizaciones, como el Festival de las Rebeldías y la Resistencias, y algunos campamentos de los Jóvenes en Resistencia Alternativa, entre muchas otras actividades. Xochicauautla ha participado en el Tribunal Permanente de los Pueblos, hacen viajes para dar a conocer la lucha y la organización, así como para crear vínculos entre hermanos.

El pueblo de San Francisco es un pueblo chico y era muy tranquilo hasta el 2007 cuando empezaron este tipo de proyectos y de malos entendimientos, y es que jamás hubo por parte del gobierno la disposición de dialogar con la gente. A las autoridades no les dieron la información sobre el proyecto, cuando comenzaron las violaciones fue entonces que el pueblo se organizó.

Los ingenieros les comunicaron que las autoridades sí sabían del proyecto y que fueron ellos los que ocultaron la información, por lo que hubo un enfrentamiento entre el pueblo y las autoridades hasta ese momento en el cargo. Ya con la información completa la mayoría de la gente votó en contra del proyecto.

Existen estudios del gobierno desde 1967-1968 sobre la zona de Lerma con la intención de llevar a cabo proyectos de vivienda e industria, pero no fueron hechos. Las autoridades jamás dieron la información completa sobre los daños que la carretera traía, no se dijo que la carretera pasaría por el bosque y los sembradíos de la comunidad. En algunas ocasiones se solicitó información a los expertos y se dieron cuenta que el daño era grande, un daño profundo a la cultura y a la naturaleza, sobre todo al agua y los ríos subterráneos que se quieren desecar, y al cerro que se planea cortar. La situación es muy difícil. En un mapa de la zona se nota claramente como hay muchas afectaciones al cerro con el trazo carretero pues se espera abrir 80 metros de cerro para que pasen los carros.

Al principio se optó por la vía legal y los amparos, pero claramente la brutalidad del Estado que todo lo rebasa, violaba sistemáticamente los derechos de la gente. Hoy en día el apoyo popular ha reforzado la lucha del pueblo. Los mayordomos, delegados y hasta el Concejo Supremo Indígena han intentado ser divididos y disuel-

tos. Se ha buscado a toda costa fraccionar al pueblo, pero gracias al apoyo de la sociedad se siente la compañía.

Sin el agua, las tierras, las plantas y los animales no hay producción, el agua es afectada por las viviendas y las industrias. Hay que recordar que una fábrica no nos da de comer, una vivienda se puede ver muy bonita pero no nos da los alimentos. Xochicuautla mantiene a la Ciudad de México, porque le da agua, le da sus siembras, su trabajo. El sustento de todos es lo que se debe priorizar, y es que en todo el país se está perdiendo, ya no hay papa, chícharo, maíz. En su lugar el Estado discrimina a los pueblos. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué vamos a comer si llenamos todo de pavimento? A los poderosos les interesa el agua, la tierra, las minas. Todo se vuelve una mercancía. ¿Qué futuro nos espera? Que el agua y los alimentos sean más caros. ¿Queremos llenar el país de carreteras de cuota? ¿Qué beneficio tendrá el pueblo? Es explotación y esclavitud la desgracia que hunde a los pueblos de México. En todo el país, las empresas van por todo, lo quieren y ambicionan todo. Hay que velar por el bien de las personas y no de unos cuantos. La intención de los poderosos es destruir a los pueblos, como lo hicieron con la casa de Armando, y es que un buen gobierno no actúa de esa manera.

Es cierto que al principio nadie sabía qué hacer, pero se ha aprendido sobre la marcha. Hay que abrir un diálogo social fuerte y profundo para ir analizando cómo debemos trabajar juntos y no violentar ni criminalizar a la gente. Las desapariciones, los intentos de homicidio, los golpes sufridos son cicatrices de la lucha. Pero gracias a la fortaleza y al respaldo social se seguirá en la lucha.

PREGUNTAS Y COMENTARIOS

- Para la Asamblea de Pueblos, Colonias, Barrios y Pedregales de Coyoacán: ¿qué relación tienen con las Zonas de

Desarrollo Económico y Social (ZODES)^[5] y el proyecto de la planta de asfalto? ¿Están vinculados con esta lucha o sólo están luchando contra la inmobiliaria?

- Ustedes como mujeres defensoras de derechos humanos, ¿cuál ha sido la participación en sus organizaciones, así como los obstáculos a los que se han enfrentado en su diálogo no sólo con el Estado sino en la relación que establecen con sus propios compañeros? ¿Qué dinámica permea?
- ¿Cuándo y cuál fue el proyecto que presentaron en San Francisco Xochicuautila? ¿Qué han hecho en relación con los derechos de consulta? ¿Han acudido a la protección de la Comisión Interamericana, han solicitado medidas cautelares?
- A Xochicuautila; ¿hasta qué punto el tren y la carretera federal a Toluca, y el tren interurbano y la autopista les afectan?
- Para Pedregales: ¿un candidato del partido político MORENA se ha intentado vincular con ustedes? ¿Hay un aumento de la delincuencia en la zona? ¿Si la inmobiliaria suspendió la obra, quién dio el permiso de continuar con el proyecto?
- Frente de Pueblos: Puebla, Morelos, Tlaxcala: ¿ante qué instancia se han presentado los amparos?
- Si bien el derecho a la consulta es un derecho importante ya que esta debe ser libre, previa e informada, falta que se mire desde la interculturalidad, debe ser consensuada y culturalmente adecuada, valga recordar que en el caso del Acueducto Independencia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio al pueblo Yaqui la información en un CD.

^[5] Que son promovidas por las autoridades de la Ciudad de México para atraer a la población a las zonas céntricas descuidadas y devaluadas, a través de la inversión en su desarrollo.

- Pareciera que el derecho a la consulta es el horizonte, pero hay que tener mucho sigilo al tratarlo, y es que el derecho a la consulta también es un mecanismo que termina legitimando a los proyectos, ya que no existen condiciones para pararlos, más bien se trataría de negociar sus condiciones y la indemnización. En la práctica entonces la consulta, que además nunca es libre, previa e informada, legitima la actuación del Estado cómplice de las empresas, por lo tanto, es una trampa. También los gobiernos de “izquierda” como los de Ecuador y Bolivia emplean los mismos mecanismos que los países de “derecha” como Perú, Colombia y Chile. En la propia Ciudad de México, donde sus autoridades se suponen de “izquierda” se dan los mismos mecanismos. ¿Qué tanto importan los signos partidarios? ¿Se puede negociar con el Estado y salir ganando?
- Frente a toda la violencia, ¿cómo no morir en la lucha? Hay que llevar a cabo estrategias de reconfiguración del territorio a través de la organización comunitaria, el lenguaje es también un instrumento de dominio, por ello al estar informados, al compartir la información y generar una crítica, se construye la globalización desde abajo. Hay que sobrepasar el miedo inmerso en el lenguaje político y generar resistencias.
- Es muy importante informar sobre las empresas inmersas en los proyectos, como el Grupo Higa, o los vínculos de la inmobiliaria y el Estado en el caso de los Pedregales. Otro tema importante son las estrategias de oposición y violencia que genera el Estado, el cerco estatal que protege el funcionamiento de las empresas, y es que da igual la cara del político, lo que se debe atender es el funcionamiento de las corporaciones, que con estrategias de violencia legales e ilegales siguen operando, ya que nunca golpeamos el núcleo de funcionamiento del capitalismo, de aquello que destroza la naturaleza. El problema es que los estados son sólo la mano negra, los que hacen el trabajo sucio,

pues a pesar de la resistencia indígena-campesina no se ha logrado afectar el funcionamiento de las empresas. Si para las empresas hay una pausa muy larga para recuperar la inversión, se genera un daño político y económico. Por ello hay que repensar las estrategias y es que el problema es la correlación de fuerzas frente a un aparato estatal y un discurso que legitima la imposición de estos proyectos. En el caso de las compañías mineras sí existe una antipatía directamente relacionada con los costos ambientales, pero en el caso de presas, carreteras y otras obras de desarrollo como los proyectos ecoturísticos, también es necesario ver de qué manera se modifican las relaciones con la naturaleza y cómo permean los procesos de mercantilización. Existen dos retos enormes: el primero es pensar cómo se da la correlación de fuerzas entre un pueblo frente al Estado y cómo desmontar el discurso desarrollista. Estas son tareas nacionales, intelectuales, políticas y organizativas, hay que generar un discurso en común ante un problema común. ¿Frente a la depredación del capital, la fuerza social es capaz de resistir?

RESPUESTAS

ASAMBLEA DE PUEBLOS, COLONIAS, BARRIOS Y PEDREGALES DE COYOACÁN: En Pedregales la vida era feliz, conservando nuestra cultura, las formas de vivir en convivencia armónica, pero el gobierno tomó por asalto las colonias, los pueblos, los espacios. La gente llegó a los Pedregales en los años sesenta y setenta e iba ganando espacio a partir de la organización popular; allí entre todos se logró tener un techo. El proyecto de la inmobiliaria fue un asalto apoyado por un partido de izquierda, por eso ya no hay confianza en la política.

El 23 de diciembre de 2013 el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, le donó a su amigo

Simón Levy Dabbah, titular de la Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México (PROCDMX), el predio de la planta de asfalto. Cuando la comunidad se enteró de este hecho se levantaron en lucha como lo hicieron en la década de los sesenta, hay que recordar que la historia de lucha de los Pedregales viene desde 1966 cuando el 12 de septiembre de ese año el entonces regente de la ciudad, Ernesto Uruchurtu, quiso desalojar a los pobladores de Pedregales, pero fueron las mujeres y los niños los que evitaron el desalojo, esto llevó a Uruchurtu a renunciar de su cargo. Los Pedregales y la colonia de Santa Úrsula lograron mantenerse, así la historia se repite y hoy en día vuelven a organizarse para resistir. Las mujeres desde aquella época demostraron ser muy importantes en la defensa de sus familias y sus hogares.

El gobierno de Miguel Ángel Mancera (PRD) ya ha cambiado de opinión respecto de las ZODES, manifestó que el proyecto se politizó y eso supone su inviabilidad; sin embargo, pese a que supuestamente se desechó el proyecto, los colonos se mantienen en la lucha, y es que aun cuando se canceló el proyecto de la Ciudad del Futuro, el decreto para su creación todavía no ha sido derogado.

En el pasado, cuando se consiguió regularizar la posesión de los predios existía una cláusula donde se decía que en caso de atrarsarse en tres pagos del crédito de vivienda, la Institución de Vivienda y el Tribunal de Justicia podrían proceder al desalojo, sin embargo, mediante la organización popular se logró cancelar dicha cláusula, así con la memoria de la organización vecinal el día de hoy, las colonias, los pueblos y los pedregales de Coyoacán se unen contra el decreto de donación de la planta de asfalto, para que dicha acción sea cancelada, porque este lugar es el patrimonio de la comunidad, todos están en la tarea de defender este predio a través de la organización vecinal y no electoral.

Es cierto que hay delincuencia y violencia en los Pedregales, como en todos lados. En agosto de 2016 encontraron dos cuerpos en la colonia de Santa Úrsula, los vecinos no supieron quiénes eran, cuatro días después del hallazgo arribaron algunas personas a ofrecer cámaras de seguridad y el apoyo de la policía de proximidad

para resguardar la colonia; éstas son estrategias para mantener el control social que buscan aprovechar el *shock* emocional de los vecinos para que accedan a la “vigilancia”. También ha existido la presión de los grupos de choque ligados a la empresa de gas Fenosa, el gobierno no hace nada por detenerlos. Los Pedregales son señalados por el gobierno como una zona conflictiva y de delincuentes, un sitio que está “fuera de la ley”, en los operativos se llevan a los jóvenes y los tratan como delincuentes cuando no tienen pruebas para hacerles eso.

En la pregunta sobre el manantial, antes cuando no existía la red del drenaje, los vecinos acarreaban el agua, hoy la inmobiliaria se da el lujo de tirar el agua y el gobierno lo permite. Las consultas son amañadas por lo que no tienen valor para los vecinos y es que su lucha es la defensa del agua, de la vivienda, y de la vida. Hay que señalar que la vía jurídica vale, pero es sólo una vía de todo el movimiento social.

La Asamblea General de los Pedregales se congregó en un plantón indefinido con el objetivo de defender el agua y el territorio, a cinco meses de su establecimiento y asistidos por la razón científica y la razón histórica se sigue en la lucha; se va a continuar en la defensa por el agua potable y no potable, cuya función es aminorar el calentamiento de la tierra. El agua es un recurso finito del que depende la existencia humana para realizar las actividades económicas, es de suma importancia y es también una medida de seguridad nacional.

Al día siguiente de que se estableció el plantón en Av. Aztecas 215, el día 29 de abril de 2016, se presentaron unos 300 granaderos para imponer una reunión con Patricia Mercado, sin embargo, el plantón se negó al diálogo porque de hacerse, éste deber ser libre y no de manera impositiva.

Las mujeres viven la defensa de los derechos humanos de forma activa, son cinco meses que han defendido el derecho a manifestarse y a reunirse, como lo dicta la Constitución. Los vecinos se han congregado a favor de la defensa del derecho humano al agua y su función ambiental y de subsistencia. En la colonia Pueblo de los

Reyes, Coyoacán, es necesario restablecer el ecosistema, pues se han talado muchos árboles y se busca defender todo.

Después de cuatro meses de resistencia, a finales de junio se rompieron los sellos (temporalmente) de cancelación de la obra para tomar muestras de agua que fueran evaluadas por el Instituto de Geología de la UNAM. Así el 30 de agosto de 2016 se emitió la opinión técnica que sólo remite al origen de los afloramientos, se determinó que se trata de agua subterránea, alumbrada porque la empresa rompió el manto freático. En lugar de hacerse cargo del daño ambiental, Quiero Casa conectó más de diez mangueras para drenar el agua, lo que a todas luces es un ecocidio, pues está tratando de extinguir el manto freático que corresponde a un acuífero de la Reserva de la Cantera.

El agua que afloró, siempre ha sido aprovechada para uso doméstico y por las plantas de Xotepingo y de Loreto y Peña Pobre. Nada justifica que se tiren miles de litros al drenaje, cuando hay desabasto de agua en los Pedregales, el gobierno no hace nada y da la razón a la empresa. Es claro que el gobierno trata de beneficiar a la inmobiliaria y que ella misma proponga las medidas de reparación, como es la idea de crear un cinturón para acaparar el agua en su favor. Si bien el agua no es potable es susceptible de ser potabilizada.

Y es que las élites de Coyoacán a las que el jefe delegacional Valentín Maldonado sirve, ni siquiera se molestan en pagar sus servicios, ellas jamás se quedan sin luz y sin agua, no viven la realidad de los vecinos de Coyoacán. Sin embargo, en los Pedregales se han pagado los servicios de luz y agua desde siempre, aun cuando a veces no se les dan esos servicios.

Resta decir que el movimiento de los Pedregales es horizontal, sin líderes, ni partidos, lucha por su derecho al agua y a la vivienda digna, busca hacerse extensivo a otros pueblos en el país, desde Xochicuautla, los Yaquis y la Parota, porque el único recurso que queda es la organización. Así, los Pedregales han abrigado también otras luchas, por ejemplo, se da cobijo a los hermanos de Centroa-

mérica que son recibidos en su paso por México. Todo en favor de un movimiento que permita ser libres de la opresión y la represión.

FRENTE DE LOS PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA: PUEBLA, MORELOS, TLAXCALA: En Morelos las mujeres encabezan la lucha, las decisiones son de las mujeres, son ellas las que defienden a la familia, por supuesto están presentes las relaciones de género, sin embargo, la participación de las mujeres en lugares como Huesca es muy destacada, tanto que son ellas la cabeza de la lucha. Aunque hay lugares como en Tlaxcala, entre otros sitios, donde las mujeres no participan mucho, pero esto tiene que ver con la propia identidad de las comunidades. La violencia hacia las mujeres que participan en la vida política tiene muchas manifestaciones, son sujetas a la violencia sexual, una herramienta utilizada por el Estado para amedrentar su participación.

Es muy triste no tener el apoyo de la Escuela Normal de mujeres de Amilcingo, ya que en el pasado fue la propia comunidad la que impulsó la creación de la escuela en los años setenta, pero en 2014 las normalistas dieron la espalda a su pueblo, al permitirles el paso del gasoducto a sólo 800 metros de la Normal. El padrino de generación en 2014 fue el entonces gobernador de Morelos, Graco Ramírez, quien donó un camión para la escuela, así como tabletas para las alumnas.

Respecto al derecho a la consulta, este no es un derecho que pidan los pueblos, y es que es muy difícil llevar a cabo un proceso de consulta cuando ya hay una comunidad dividida, cooptada. En la reforma energética se prevé un estudio social obligado, pero no vinculante, son meros requisitos. Otro mecanismo es el de la licencia social, esto significa que las empresas prometen a las comunidades cosas para que firmen a favor del proyecto. Esta práctica es mundial, compañías en todo el mundo recurren a la compra de voluntades.

Los amparos han sido recursos jurídicos que se tramitan ante el Tribunal Agrario, como ya se dijo, el único recurso efectivo ha

sido el amparo en materia agraria, pero las empresas y el propio Estado tampoco hacen caso a las resoluciones judiciales. Sobre el caso de PIM, ya fue llevado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y su expediente tiene alrededor de 38 carpetas, aunque se les ha dado acceso a sólo 18 de éstas, pues las demás contienen información confidencial. Sin embargo, aún no hay resoluciones, el caso se abrió en 2012 y se absorben las quejas de los tres estados. Sobre la Comisión Interamericana sí se han pedido medidas cautelares, pero no hay respuesta al respecto. La respuesta es que están analizando la situación.

También existe el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos implementado por el Gobierno federal, sin embargo, no existe la confianza para pedir la protección porque finalmente aquellos a los que encomienda la protección del defensor es la misma policía que lo agredió en el pasado. Los mecanismos no son suficientes y hay muchas dudas sobre su funcionamiento.

Siempre hay miedo, y éste nos hace sobrevivir y estar alertas. Al miedo hay que tenerlo al lado, juntito a ti, ni atrás porque no te sirve de alerta, ni adelante porque no te permite avanzar, te paraliza.

SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA: El proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan está concesionado al Grupo Higa, constructora ligada al asunto de la Casa Blanca.^[6]

Sobre la participación de las mujeres, ellas son las que se quedan en casa y por lo tanto están al pendiente de cuidar y proteger el bosque que genera agua. Su lucha es por defender la naturaleza y sus familias, han sido ellas las que enfrentan a los granaderos y a

^[6] “Casa Blanca” es un escándalo de corrupción destapado por la periodista Carmen Aristegui en 2014. En él muestra que el Grupo Higa le regaló una lujosa casa en Lomas de Chapultepec a la esposa del presidente Peña Nieto, Angélica Rivera, quien fue beneficiada con varios contratos de licitaciones públicas en el estado de México. En <http://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/> (fecha de consulta: 9 de noviembre, 2014).

la empresa y las que dan hospedaje a las demás organizaciones que luchan por lo común. Las mujeres pusieron un campamento el día 15 de junio de 2015, allí se plantaron durante diez meses hasta que fueron agredidas, algunas mujeres estaban en la casa de Armando García cuando fue derribada por las autoridades.

Se han solicitado medidas cautelares, pero es muy complicado tenerlas. El derecho a la consulta tampoco es un derecho por el que se luche. Sobre la consulta ésta nunca es útil porque las propias autoridades ocultan información, sólo van y dicen los beneficios, pero nunca dicen que esa carretera tiene muchos impactos y afectaciones, que daña las venas subterráneas, que llora la tierra, que el agua se va a acabar, que si ponen una carpeta de asfalto el ciclo del agua se interrumpe. Luego nos va a hacer falta el agua. Los pobladores somos los que pagamos todos los costos. Se han llevado a cabo mesas técnicas y mesas de trabajo para dar soluciones alternativas, también un asunto que hay que tener presente es que se han encontrado vestigios de culturas ancestrales, esto también influye en el asunto.

Respecto de los partidos políticos, existen algunos candidatos que han ofrecido dialogar, defender y apoyar la lucha de Xochicuautla, pero sólo es un dicho, ninguno cumple su palabra, todas son falsas promesas. Las falsas ideas del desarrollo son usadas para abusar de la comunidad. Hay que analizar cuál es el supuesto “desarrollo”. Los pueblos no son los violentos, si hay marchas y plantones es porque el gobierno genera problemas, y es el sistema el que obliga a salir a las calles a luchar.

CÉSAR ENRIQUE PINEDA: Resta solamente agradecer a los compañeros el haber estado en la UNAM para compartir sus testimonios y a la gente interesada en defender a la Madre Tierra.

* * *

Las luchas en defensa de lo común no serían posibles sin la construcción de una subjetividad compartida que permite a los y las que resisten legitimar sus acciones, visualizar horizontes y confrontar las visiones hegemónicas del desarrollo y progreso que mercantilizan las relaciones sociales y con la naturaleza. De esta manera, la necesidad de emprendimientos propios, autogestivos y que posibiliten una vida digna en el marco de la tradición cultural de sus integrantes, constituye un tema clave y una parte esencial de cualquier resistencia. Al Estado y al capital se lo combate no sólo con acciones de movilización directa, sino con el trabajo colectivo que, además de constituir el punto de partida para una autonomía material, son la fuente de una subjetividad comunal. En los siguientes testimonios veremos con más detalle estos emprendimientos que se hacen desde la comunidad y que al mismo tiempo hacen la comunidad: desde la educación propia, alimentación, comercio, hasta la justicia y rehabilitación. La construcción de una autonomía intelectual entre los jóvenes indígenas que se contraponen a la larga tradición indigenista en México, la manera como disputan ellos y ellas el lugar, el nombre y los significados que se les atribuyen desde la sociedad “mestiza” y sus instituciones será el punto de partida en el siguiente debate sobre espacios autónomos de producción simbólica, política y material más allá del Estado.